

EDJ 2007/4750

Juzgado de Instrucción nº 1, Santander, A 1-2-2007, nº autos 230/2007
Pte: Hoya Coromina, José

Resumen

Se decreta la prisión provisional incondicional y comunicada del acusado en causa incoada por delito de estafa. Para el instructor son evidentes los indicios racionales de la comisión del delito que se imputa, la gravedad del mismo, la alarma social generada por hechos como los que son objeto del presente de enjuiciamiento que atacan a las bases de nuestra sociedad.

NORMATIVA ESTUDIADA

LO 10/1995 de 23 noviembre 1995. Código Penal
art.248

ÍNDICE

ANTECEDENTES DE HECHO	2
FUNDAMENTOS DE DERECHO	2
FALLO	2

CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS

ACCIÓN PENAL

EN GENERAL

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD

En general

Prisión preventiva

Cuestiones generales

Criterios para su imposición

ESTAFA

PENALIDAD

En general

FICHA TÉCNICA

Favorable a: Acusación particular; Desfavorable a: Inculpado

Procedimiento:Primera Instancia

Legislación

Aplica art.248 de LO 10/1995 de 23 noviembre 1995. Código Penal

Cita art.17apa.1, art.17apa.4 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española

Cita art.503, art.504 de RDLeg. de 14 septiembre 1882. Año 1882. Ley de Enjuiciamiento Criminal

Jurisprudencia

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD - En general STC Sala 2ª de 26 julio 1995 (J1995/3567)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD - En general STC Sala 2ª de 17 enero 1994 (J1994/159)

Cita en el mismo sentido STEDH de 26 enero 1993 (J1993/14280)

Cita en el mismo sentido STEDH de 27 agosto 1992 (J1992/13841)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD - En general STC Sala 1ª de 18 enero 1990 (J1990/321)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD - En general STC Sala 2ª de 3 abril 1987 (J1987/40)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD - En general STC Pleno de 19 diciembre 1985 (J1985/152)

Cita en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD - En general STC Sala 1ª de 26 noviembre 1984 (J1984/108)

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En las presentes diligencias se han practicado las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, desprendiéndose de lo actuado que el imputado en las presentes actuaciones, Benjamín natural de Palacios de la Sierra con domicilio en León nacido el día veintiocho de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, hijo de Tomás y de Alejandra, con D.N.I. núm. 000, colaboró con las personas que sustrajeron fraudulentamente de la cuenta de Agustín, mediante transferencias efectuadas a la cuenta del imputado así como mediante la venta de acciones del denunciante, procediendo el imputado, una vez abonadas las cantidades en su cuenta, a su extracción en metálico para enviar la cantidad total a las personas que efectuaron la transferencia, previo cobró de una comisión del 10% del valor total.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Al aparecer de las actuaciones unos hechos que revisten caracteres de los delitos, previstos y penados en los artículos 248 y concordantes del Código Penal EDL 1995/16398 y existiendo motivos bastantes para estimar responsable de los mismos a la persona identificada en el hecho anterior, en atención a sus circunstancias personales y a la pena señalada en el referido texto punitivo, y a la vista de lo dispuesto en los artículos 503, 504, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1 , se estima procedente decretar su prisión provisional.

SEGUNDO.- En este punto, habrá de partirse del Principio Constitucional contenido en el artículo 17.1 y 17.4 de la Constitución EDL 1978/3879 , que si bien establece el derecho a la Libertad, no es menos cierto, que tal derecho habrá de ceder ante la legitimidad constitucional de la Prisión Provisional, en aquellos supuestos en que concurren los requisitos establecidos por la norma, o conforme señala la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/1995 de 25 de julio EDJ 1995/3567 , que el presupuesto de tal legitimidad se encuentra en la existencia de indicios racionales de la comisión de un delito y su concepción como medida excepcional, provisional o subsidiaria, o siguiendo la Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la constatación de razonables sospechas de responsabilidad criminal, como principio sine quanon, para la adopción o mantenimiento de tal medida cautelar gobernada por el principio de provisionalidad. (Sentencias 27-8-92, caso Tomasi EDJ 1992/13841 y 26-1-93 caso W. EDJ 1993/14280).

TERCERO.- Que en idéntico sentido el Tribunal Constitucional, se ha venido pronunciando acogiendo la doctrina ya citada, precisando que tal medida deba ser revisada si cambian las circunstancias que dieron motivo a su adopción. (Sentencias 108/1984 EDJ 1984/108 , 178/1985 EDJ 1985/152 , 8/1990 EDJ 1990/321 y 9/1994 EDJ 1994/159 entre otras). Concluyendo la Jurisprudencia Constitucional que el fin de la Prisión Provisional, responde a la necesidad de conjugar ciertos riesgos, relevantes para el proceso o en su caso para la ejecución del fallo, que tienen su origen en el imputado, su sustracción a la acción de la Justicia, la obstrucción a la instrucción y la reiteración delictiva, (Sentencia 40/1987 EDJ 1987/40). Concluyendo el referido Tribunal en cuanto al concepto de sustracción a la acción de la Justicia, en la necesidad de constatar la existencia de tal peligro, valorándose además de las características y gravedad del delito y de la pena que al mismo correspondería, las circunstancias concretas y las personales del imputado, de las cabe señalar el arraigo personal, profesional o social, (Sentencia 128/1995 EDJ 1995/3567).

CUARTO.- Que consignado lo precedente procederá valorar en el presente supuesto la concurrencia de los requisitos, exigidos por la Jurisprudencia en aplicación de la Prisión Provisional, habiendo de señalarse, que siendo evidentes los indicios racionales de la comisión del delito que se imputa, la gravedad del mismo, la alarma social generada, por hechos como los que son objeto del presente de enjuiciamiento que atacan a las bases de nuestra sociedad, lo que justifica la alarma social que tales hechos generan, que si bien hasta la fecha, ha podido ser controlada como consecuencia de las medidas adoptadas en el presente procedimiento, es evidente que una vez se alcen las medidas extraordinarias adoptadas, en beneficio de la investigación y en garantía de los intereses que se encuentran en juego, y que por su propio esencia de extraordinarias deberán ser breves en el tiempo, mostraran con total virulencia la alarma social que tales hechos como el presente provocan en la conciencia social, lo que hace presumir que la no adopción de una medida que garantice el sometimiento a este procedimiento haría viable la elusión de la Justicia con lo que se quebrarían los fines del procedimiento penal, lo que en el momento presente aconsejan la adopción de la referida medida, y en su consecuencia conduce a la necesidad de adoptar la medida cautelar objeto de la presente resolución, si bien la misma podrá se eludida constituyendo la fianza que se establece en la parte dispositiva de esta resolución.

FALLO

En atención a todo lo expuesto,

Dispongo: Decretar la prisión provisional incondicional y comunicada de Benjamín eludible mediante fianza de seis mil euros; para llevar a efecto esta medida, líbrense los oportunos despachos; Póngase en conocimiento del Ministerio Fiscal; notifíquese a dicho imputado la presente resolución, instruyéndoles de sus derechos y recursos para ejercitar el derecho de defensa.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, proveyéndolas que la misma no es firme pudiéndose interponer contra la misma recurso de reforma, que deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días a partir de su notificación.

Así lo dispongo mando y firmo. José Hoya Coromina.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 39075430012007200001